

El dificultoso camino a la neoliberalización: El caso de la Sociedad Nacional de Agricultura, 1983-1990

The difficult road to neoliberalization: The case of the Sociedad Nacional de Agricultura, 1983-1990

PEDRO LOVERA PARMO¹

RECIBIDO: 05 DE JUNIO DE 2017 | **ACEPTADO:** 28 DE JULIO DE 2017

RECEIVED: JUNE 05, 2017 | **APPROVED:** JULY 28, 2017

RESUMEN

El presente artículo tiene por objetivo analizar el proceso de neoliberalización de la Sociedad Nacional de Agricultura entre los años 1983-1990. Habitualmente se piensa que la patronal agraria, así como el resto de los gremios del gran empresariado experimentaron un proceso de neoliberalización automático, lo cual les habría llevado a la adscripción doctrinaria de las ideas monetaristas. Por el contrario, este artículo pretende demostrar que la neoliberalización no fue experimentada de tal manera por los empresarios agrícolas aglutinados en la SNA, sino que este proceso fue tenso y dificultoso, caracterizado por los constantes debates con los representantes de las ideas dogmáticas del monetarismo, así como con las autoridades de la dictadura cívico-militar.

39

PALABRAS CLAVE: NEOLIBERALIZACIÓN - SOCIEDAD NACIONAL DE AGRICULTURA - EXPERIENCIA - INTELLECTUALES DEL DOGMATISMO NEOLIBERAL.

ABSTRACT

The aim of this article is to analyze the process of neoliberalization of the Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), between the years 1983-1990. It is usually thought that the agrarian bosses, as well as the rest of the business associations, experienced a process of automatic neoliberalization, which would have led them to the doctrinal ascription of monetarist ideas. On the contrary, this article aims to demonstrate that neoliberalization was not experienced in such way by the agricultural entrepreneurs agglutinated in the SNA, but that this process was tense and difficult, characterized by the constant debates with the representatives of the dogmatic ideas of monetarism, as well as with the authorities of the civic-military dictatorship.

KEYWORDS: NEOLIBERALIZATION - SOCIEDAD NACIONAL DE AGRICULTURA - EXPERIENCE, INTELLECTUALS OF NEOLIBERAL DOGMATISM

1 Magíster en Historia, Facultad de Humanidades Departamento de Historia, Universidad Santiago de Chile. Contacto: ploveraparmo@gmail.com

INTRODUCCIÓN

La temprana imposición del modelo neoliberal en Chile llevó a que el país fuese catalogado como centro del primer experimento de conformación de un Estado neoliberal. “Este brutal experimento llevado a cabo en la periferia se convertirá en un modelo para la formulación de políticas en el centro” (Harvey, 2014, p. 25), lo que se etiquetó como el “Chile modelo” (Drake-Jaksic, 1999). No obstante, la rápida adscripción de la dictadura cívico-militar a las ideas monetaristas no debe hacer pensar que el golpe de Estado se produjo inspirado en aquel ideario, o que éste se asumió inmediatamente post 11 de septiembre de 1973. Como señala Verónica Valdivia el neoliberalismo no era el proyecto de las FF.AA., al momento de ejecutar el golpe de Estado, sino que esta ideología -que posteriormente deriva en proyecto- tuvo que ir ganando terreno, incluso a expensas de generar un verdadero contrapunto militar en las Fuerzas Armadas que terminó con la salida del cabecilla de la Fuerza Área, el General Gustavo Leigh (Valdivia, 2001; Valdivia, 2003). Desde las políticas de shock en abril de 1975 hasta el término de la dictadura cívico-militar en 1990, el neoliberalismo tuvo un tránsito de altibajos, o como le denomina Pilar Vergara, de auge y caída. (Vergara, 1984). Manuel Gárate (2016), tomando como insumo los trabajos recién citados, realiza una periodización correspondiente al neoliberalismo durante su etapa dictatorial, señalando un primer período, entre los años 1975 y 1982, como de aplicación ortodoxa y dogmática de las ideas del liberalismo económico -neoclasicismo-. Durante este primer período, la relación de los empresarios y sus gremios con el régimen militar no estuvo exenta de importantes debates en cuanto a la aplicación de las políticas de shock. Si bien, el empresariado no restó su apoyo político al régimen y a la posibilidad de modernización de la economía, la rapidez con la que se estaba llevando a cabo no siempre acomodaba a un empresariado acostumbrado al proteccionismo, y que durante los años del Estado empresario se había convertido en un agente poco competitivo (Montero, 1997). Por su parte, la tecnocracia neoliberal de los Chicago estaba dispuesta a no dejarse influenciar por distintos grupos de presión -como los gremios empresariales- en cuanto a la aplicación de las políticas de shock (Ross, 2004). Esto conllevó a que los gremios empresariales fueran apartados de las grandes decisiones macroeconómicas, y produjo a la vez disputas al interior del bloque dominante. Sin embargo, estas disruptivas fueron al interior del consenso neoliberal, donde se confrontaban una línea gradualista y una de shock (Campero, 1984).

El segundo período indicado por Gárate, coincidiendo con Eduardo Silva (1993), se produce post-crisis 1982-1983, donde se aplicará el modelo de una forma más pragmática (Gárate, 2016; Montero, 1996; Silva, 1993; Ffrench-Davis, 2003). Ésta etapa está marcada por el retorno de la iniciativa política de los empresarios y por la decisión del gobierno de atender a las demandas de éstos, en cuanto a la aplicación de una estrategia más pragmática de desarrollo (Ffrench-Davis, 2004). En palabras de Gárate la crisis obligó al régimen a virar de un monetarismo “puro y duro” a un modelo liberal “con ciertas dosis de prag-

matismo” (Gárate, 2016, p. 197). Habitualmente se ha pensado que durante esta fase más pragmática de la aplicación de las ideas monetaristas, tuvo como correlato un pliegue automático por parte de los grupos empresariales -en especial los gremios- al “modelo”. No obstante, desde el presente artículo pretendemos tensionar dichas tesis tomando como caso a la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA). Lo que este artículo plantea por hipótesis es que la adaptación de la SNA al neoliberalismo fue un proceso tenso y dificultoso, caracterizado por los debates de la Sociedad con economistas identificados con la aplicación dogmática de las ideas monetaristas entre 1975 y 1982. Esta experiencia vivida condicionó la percepción de empresarios agrícolas -experiencia percibida- agrupados en la SNA, que los llevó a una actuación sociopolítica caracterizada por una actitud confrontacional con aquellos actores que propiciaban una total desregularización del mercado agrícola. Desde 1983 comenzó un proceso de irrupción en la escena pública caracterizado por la presión para corregir los aspectos más dogmáticos del neoliberalismo en el mundo agrario. Este proceso se extendió desde 1983 a 1987, año en el cual la Sociedad, basada en su experiencia había logrado corregir aspectos sustanciales del neoliberalismo en el sector silvoagropecuario, y podía estar lista para su adaptación, pero bajo las propias lógicas impuestas por la SNA. Es decir, se adaptaron al neoliberalismo, pero a su propia forma. Es así, como desde 1988 a 1990 observamos a una SNA comprometida con los aspectos fundamentales del modelo. De esta forma la hegemonía neoliberal al interior de la clase dominante agraria, representada por la SNA, se comenzó a consolidar durante la década de los ochenta.

I. 1983-1984: ROMPIENDO LA PASIVIDAD

Distintos estudiosos (Campero, 1983; Montero, 1997; Ross, 2004) han coincidido en indicar que la pasividad a la que fueron relegados los sectores empresariales, en especial los grandes gremios de la industria (SOFOFA), la minería (SONAMI) y la agricultura (SNA), se debió a los conflictos que tuvieron éstos con la tecnocracia ortodoxa del monetarismo -que se expresaba no sólo en los cuadros de los “Chicagos”, sino también en las autoridades cívico militares que dirigían los distintos ministerios-. Por ejemplo, no fueron extraños conflictos desatados entre los empresarios agrícolas y el Ministro de Agricultura de 1976, el General de Carabineros Tucapel Vallejos, a quien acusaban junto su equipo asesor, de tener “un perfil excesivamente tecnocrático”, además de poco “cercano al sector agrícola” (Campero, 1983, p. 146). Los alegatos no eran injustificados, en tanto, una de las propuestas realizadas por los Chicago Boys, era la necesidad de separar las decisiones económicas de las influencias de los empresarios en general. Para los economistas formados por Milton Friedman las medidas económicas no deben ser tomadas por los “gremios que defienden intereses parciales, ni por el poder político tradicional quienes guían los destinos de los gobernados, sino por una tecnocracia que sacraliza el papel de los expertos, especialmente si estos poseen el saber de la ciencia económica” (Gárate, 2016, p. 207). En base a esto se

produjo una relegación de los empresarios, lo que terminó por imbuirlos en una pasividad política que les dificultó su desenvolvimiento en el espacio público y su capacidad de injerencia en el diseño de la política económica.

No obstante, este esquema se comenzará a resquebrajar luego de pasar por el trauma de la modernización parcial y forzada en el agro de 1973 a 1982 y por el “verano caliente” de 1982 (Gómez, 1992). La SNA concluyó que la pasividad a la que había sido sometida por la injerencia de la tecnocracia neoliberal (Montero, 1997; Ross, 2004) le contrajo pocos réditos en su principal tarea, a saber, la defensa de los intereses de los agricultores. Fue así como se desplegó, desde 1983, una crítica sistemática a la gestión económica en el rubro, lo que derivó en un nuevo intento por tomar el protagonismo arrebatado por la ortodoxia neoliberal. A la vez que se adhería férreamente a la acción de las Fuerzas Armadas en la conducción del Estado y sus funciones de seguridad interior, se criticaba la gestión de los economistas civiles, produciendo un hiato en los discursos de la Sociedad entre gestión económica por un lado, y por otro, la política-social y de seguridad del régimen liderado por el General Pinochet. Desde el medio oficial escrito de la SNA, la revista *El Campesino*, se expresó la crítica a la ortodoxia neoliberal, a la vez que se denotaba un estilo político confrontacional con aquellas ideas. Se fue asumiendo la defensa de la producción interna, esgrimiendo el argumento de la necesidad de sustituir importaciones como forma de equilibrar la balanza comercial. De esta forma las editoriales de *El Campesino* -y la acción de la propia SNA- apuntaban a fomentar las exportaciones y disminuir las importaciones. Esto se reflejó en la crítica que se realizaba a la importación de productos lácteos (*El Campesino*, enero-febrero de 1983, p.1). Las respuestas a nivel gubernamental no se hicieron esperar. Jorge Prado, ex vicepresidente de la Sociedad y Ministro de Agricultura desde el año 1982 anunció que en el caso de los productos lácteos se mantendrían sobretasas arancelarias compensatorias del subsidio que tiene este producto en los países de origen². Se garantizaba, a través de una política de aranceles y derechos específicos la estabilidad relativa de los productos silvoagropecuarios más golpeados por la apertura del mercado nacional. Prado señaló posteriormente que medidas como esta “traerán tranquilidad a los productores” (24 Horas El Diario de Puerto Montt, 17 de septiembre de 1983).

De este modo, la SNA comenzó a realizar una serie de exigencias de intervención estatal para evitar el colapso de los agricultores. En su editorial de marzo de 1983, en *El Campesino* iniciaban que, dada la coyuntura económica, los esfuerzos deben concentrarse en la sustitución de importaciones, para lo cual la autoridad económica ha dado algunos pasos importantes como son la devaluación del peso, **incentivo a los poderes compradores privados**, línea de crédito especiales para la siembra

2 Los subsidios otorgados en los países de origen fueron constantemente denunciados por la SNA. Éstos presuponían que las mercancías que Chile importaba como los productos lácteos venían subsidiados en sus países de origen, lo que posibilitaba que fueran comercializados a un precio menor que sus pares locales, lo cual para la SNA constituía una competencia desleal.

de cereales” (El Campesino, marzo 1983, p. 3)³. Este tipo de medidas entusiasmaron a los agricultores, que veían en las autoridades vocación de otorgar protección al campo, algo totalmente vedado por la ortodoxia neoliberal quienes planteaban el desarrollo de los productos que mostrasen ventajas comparativas y tuviesen la capacidad de competir con los productos importados (Cerón, 1987; Gómez, 2001; Armijo, Caviedes, 1997). La ampliación de los poderes compradores, como la Confederación Nacional de Cooperativas del Agro (COPAGRO) que funcionaba como poder comprado para el trigo, maíz y arroz decidió extender su capacidad de compra a otras leguminosas, lo cual tendría como efecto que “los productores se sentirán más motivados en los rubros aludidos, a los que pronto se sumarán aquellos agricultores que dedicarán sus tierras a las leguminosas”⁴ (La Discusión, julio de 1982).

No obstante, la SNA añoraba una solución integral y global a los problemas que aquejaban a los empresarios del agro, por lo cual, pese a celebrar las medidas adoptadas, indicaban que éstas “decisiones y sus alcances, no llegan a satisfacer todas las legítimas aspiraciones que han planteado los diversos sectores productivos de la nación”. Se toma como ejemplo la modificación arancelaria, la cual se lamentaban sólo duraría hasta octubre de 1984, tiempo insuficiente para “recuperar los niveles de actividad competitiva” (El Campesino, abril 1983).

Las banderas de estas luchas al interior de la SNA serán recogidas por la Mesa Directiva elegida en abril de 1983, que debía reemplazar en la presidencia a Germán Riesco. La nueva Mesa quedó integrada con: Manuel Valdés Valdés en la presidencia, José Moreno Aguirre como primer vicepresidente, Nicanor Allende Urrutia como segundo vicepresidente, Manuel Valdés Tagle como vicepresidente adjunto y Raúl García Astaburuaga como Secretario General. Esta nueva directiva, con sus cuadros políticos afines demandó con mayor ahínco la protección estatal como forma de corregir los desequilibrios del mercado agrícola, lo que a su vez era coincidente con la necesidad de salir de la pasividad.

Un estilo más frontal no tardó en ponerse en práctica cuando el 27 de abril del año 1983 Pinochet, en compañía de los ministros de Hacienda Carlos Cáceres, de Economía, Fomento y Reconstrucción, Manuel Martín, de Agricultura Jorge Prado, de ODEPLAN, Brigadier General Sergio Pérez y el Secretario de la Presidencia de la República, General Santiago Sinclair, ofrecieron un desayuno al que fue convidada la nueva Mesa Directiva. Ésta no dudó en exigir una definición de la política agraria para los próximos diez años “que permita recuperar parte del tiempo perdido.” De esta manera se comienza a hacer cada vez más patente la necesidad de una política de mediano y largo plazo para el agro. Ante este emplazamiento de la nueva directiva, Pinochet señaló que las políticas que se aplicarían al sector se harían pragmáticamente, lo que para Manuel Valdés era de vital trascendencia,

3 Las negritas son nuestras.

4 Los poderes compradores se constituyeron en una de las principales demandas de acción proteccionista estatal para la SNA.

puesto que “significa que vamos a dejar las **baterías y las ortodoxias para ir a la solución del problema**” (El Campesino, julio 1983- p. 4-5) ⁵. Se retomaba de esta manera una relación más estrecha con la dictadura cívico-militar, lo cual no quiere decir que existiesen soluciones inmediatas a los problemas que aquejaban a la SNA o incluso disputas. Valdés, señalaba que, en nombre de todos los agricultores, se había ofrecido el respaldo al gobierno en todo lo que éste necesitara.

La reunión tuvo repercusiones casi inmediatas. Dos días después, el 29 de abril, el Ministro de Agricultura Jorge Prado, anunció las bases de la política triguera para la temporada de 1983-1984. Aun así, para la SNA habían problemas que aún eran agravantes: la renegociación de sus elevados pasivos, la deficiente comercialización de sus productos, la alta tributación y la elevada tasa de interés de los créditos operacionales, seguían impidiendo un despegue del sector agrícola. Esta situación es aclaratoria de la estrategia de la SNA. Al tiempo en que se estrechaban las relaciones con el Gobierno, no se abandonaba su estrategia de reactivación política frontal que habían desplegado desde 1983, exigiendo una estrategia de solución global. Dando cuenta de ello, la SNA se reunió con dirigentes agrícolas de todo el país, con el fin de intercambiar puntos de vista sobre lo que estaba ocurriendo en el sector. Estas reuniones concluyeron con una junta en el Salón del Consejo de la Sociedad Nacional de Agricultura, donde concurrió Valdés en su calidad de Presidente, los tres Vicepresidentes y el Secretario General de la SNA, que a su haber era Raúl García Astaburuaga. Además de ello asistieron Domingo Durán, Alfonso Larraín, Presidente y Secretario General respectivamente de Confederación de Asociaciones y Federaciones Gremiales de Agricultores de Chile, Federico Marín, Presidente de la Sociedad Agrícola del Norte, Juan Harismendy, Presidente Agrícola de BíoBío, Heriberto Schilling, Presidente de Agricultores de Llanquihue, Claudio Valverde Presidente de la Federación de Asociaciones Gremiales de la provincia de Cachapoal, Eduardo Carmine Presidente de la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco, Elsa Gardeweg, Directora de COPAGRO y Ricardo Westermeyer, Presidente de la Sociedad Agrícola de Valdivia, SAVAL y Presidente del Consorcio de Sociedades Agrícolas del Sur, CAS.

La reunión con los distintos gremios patronales del agro -grandes y medianos-concluyó con la elaboración de un documento que resumía los aspectos más agravantes del agro y realizaba un listado de exigencias, como la elaboración de una política agraria de largo plazo. Se indicaba que en esta solución se debía contar con una “participación activa de los productores” -recordando que para la SNA su relegamiento a un segundo plano fue causa de la aplicación de medidas atentatorias contra sus intereses- y la elaboración de una política crediticia acorde con el sector. Esta alianza con los demás gremios patronales del agro se selló en la Declaración de El Tepual, suscrita en Puerto Montt. De esta manera la reactivación de la SNA no sólo involucraba a su propia orgánica, sino además a otros gremios patronales agrícolas, los cuales incluso habían mostrado animadversión

5 Las negritas son nuestras.

por la SNA en distintos períodos históricos, como es el caso del Consorcio Agrícola del Sur, CAS (Oszlak, 2016). Sin embargo, como en los tiempos traumáticos de la Reforma Agraria y la Unidad Popular, la SNA lograba alinear tras de sí a los más importantes gremios del mundo del agro, con el fin de enfrentar las problemáticas comunes (El Campesino, julio 1983, p. 8-11).

Este estrenado estilo confrontacional no dejó incólumes a otros personeros de la derecha que simpatizaban con las propuestas de la ortodoxia neoliberal, como el diario *El Mercurio*, quienes apuntaban a que los empresarios agrícolas buscasen un trato preferencial, volviendo así a las viejas prácticas empresariales. La respuesta de la SNA, no tardó en llegar. En una carta enviada al mismo diario, Raúl García Astaburuaga y José Moreno Aguirre, Secretario General y Presidente en Ejercicio -debido a la ausencia de Valdés-, respectivamente, indicaban que se está “desvirtuando la realidad”.

Desde la SNA se esgrimió que no demandaban ningún trato preferencial. Políticas como la triguera, no constituían un trato preferencial, sino que el establecimiento de derechos específicos para la importación de ciertos productos, los cuales correspondían a un esquema general de aplicación. El ejemplo de la mínima intervención estatal en la política triguera -a través del establecimiento de bandas de precios- determinando un precio de referencia para dicho producto, correspondía al rol subsidiario del Estado para restablecer la competencia “en un mercado que carece de ella”. Es más, se decía que, creían decididamente en que “iniciativas similares a este deben implementarse también respecto a otros rubros agrícolas, aspiración en la que esperamos contar con la comprensión de los Ministros de Agricultura y Economía, como ocurrió en relación con el trigo” (El Mercurio, 31 de mayo de 1983).

Aquí comenzaron a entrar al debate los representantes de la ortodoxia neoliberal quienes no dudaron en atacar las peticiones de la SNA. Ernesto Fontaine señalaba que políticas como la de banda de precio del precio del trigo o tarifas aduaneras especiales para ciertos productos, “distorsionaban el sistema de precios y hacen que el país incurra en ineficiencias al asignar recursos” (El Mercurio, 23 de mayo de 1983, Cuerpo C, p. 4). Sin embargo, los ataques de la ortodoxia no frenaron a la SNA en su afán de establecer medidas proteccionistas, a través de bandas de precios u otros mecanismos como los poderes compradores. Es más estos mecanismos buscaron extenderse a otros productos como las oleaginosas, arroz, maíz, entre otros. Esto como una medida para neutralizar las fluctuaciones violentas de los precios agrícolas, “derivados de la apertura de nuestra economía al exterior”, de modo que las “**bandas de precios** en algunos casos, estructuradas en base a lo que ha sido el comportamiento histórico promedio de tales precios, **es un medio eficiente para atenuar tales funciones**” (El Campesino, agosto 1983, p. 32-35). Urgía que el Estado implementase un plan reactivador “**sin limitaciones dogmáticas**” (El Campesino, octubre de 1983, p. 18)⁶.

6 Las negritas son nuestras.

Estas propuestas de la Sociedad constituían una crítica nítida a la gestión político-económica encabezada por los Chicago Boys sobre el repliegue del Estado de toda función que tenga que ver con el mercado. Las políticas de este grupo de economistas generaron inestabilidad e incertidumbre, lo cual contrastó con las demandas de una estrategia de desarrollo sectorial de largo plazo que dé “condiciones de estabilidad y permanencia que por su naturaleza requiere” el sector agrícola (El Campesino, octubre 1983, p. 2-3). Asimismo, no fueron pocas las ocasiones en que la SNA atacó el esquema de importaciones, una de las consecuencias de “la apertura comercial indiscriminada al exterior” (Gárate, 2016, p. 209). Se pidió que estas deben ser frenadas en muchos casos como el de la leche y sus derivados, el vino, trigo, remolacha y carne (El Campesino, octubre 1983, p.8). La apertura de la economía no era rechazada per se, sin embargo, su aplicación ha “incurrido en excesos que han causado estragos en algunos rubros agrícolas y consecuentemente en zonas con poca capacidad de uso limitado de la tierra” (El Campesino, octubre 1983, p.19). Un ejemplo de esta materia es la importación de carne, ante la cual se pedía al gobierno adoptar medidas que permitieran controlar las importaciones de este producto, “ya que ellas constituyen un gasto innecesario de dólares y un desincentivo para los productores” (El Campesino, mayo 1984, p.5). Por su parte el Presidente de la Asociación de Productores de Carne, Fernando Becker indicó que “la importación de carne es una muestra de la imperiosa necesidad de fijar una política agraria” (24 Horas El Diario de Temuco, 28 septiembre 1983, p. 4).

46

Conmemorando diez años del golpe de Estado en la Feria Internacional de Santiago (FISA) de 1983, Valdés indicó que se hace necesario, por parte de la autoridad, una “disposición más **pragmática y desprovista de paralizantes rigideces doctrinarias**, de parte de las autoridades para enfrentar los problemas de nuestra agricultura” (El Campesino, enero-febrero 1984, p. 2-3)⁷. Junto con esto, la SNA siguió pujando por la elaboración de una solución global a los problemas del agro, por lo que el 6 de marzo de 1984 se reiteró la necesidad de una política de largo plazo. La respuesta no se hizo esperar, y el 9 del mismo mes, a través de las gestiones de Manuel Martín (El Mercurio, 10 de marzo de 1984, Cuerpo B p. 1), los empresarios se reunieron con el general Pinochet, acordando con él que las empresas estatales comprarían productos nacionales (El Mercurio, 11 de marzo de 1984, Cuerpo C . p. 1-6). El 2 de abril se nombraba a Modesto Collados como Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción de Chile. Para la SNA esto representó un signo positivo y señalaron que “estamos ciertos que Modesto Collados hará un buen equipo con el titular de agricultura en la tarea de resolver los problemas que aún afectan a nuestra actividad” (El Campesino, mayo de 1984, p. 6). Este cambio en la cartera de Economía -que se sumaba al reemplazo del bi-Ministro Rolf Lüders en el año 82- facilitó la adopción de medidas atentatorias contra la ortodoxia neoliberal, las cuales venían siendo presionadas por la SNA. Se establecieron las bandas de precios y poderes compradores para el trigo, ade-

7 Las negritas son nuestras.

más de una banda para el azúcar y el aceite comestible. El presidente del Comité de Cultivos de la Sociedad, Ernesto Correa Gatica celebró las nuevas orientaciones del gobierno (El Campesino, junio de 1984, p. 9). Para el historiador Fabián Almonacid estas medidas representaron una política más comprometida con los problemas económicos de la agricultura, dejando atrás las medidas más ortodoxas (Almonacid, 2016). De esta forma la penetración de la economía de mercado en el agro se fue adecuando a la realidad social del sector (Santana, 2006, p. 276), tanto como los empresarios agrarios se debieron adecuar a esta nueva realidad.

Las peticiones de la SNA llegaron a buen cause -no el esperado en cuanto a tiempos- cuando el gobierno desarrolló el Plan Trienal de 1984-1986, el cual era visualizado como la solución global al problema de la agricultura. La Sociedad hizo una serie de observaciones a dicho plan, en el cual trabajó orgánicamente a pedido de las autoridades gubernamentales. Las sugerencias realizadas iban en sentido de ampliar las medidas proteccionistas como las bandas de precios y los poderes compradores. Hay que aclarar que estas demandas en pos de una mayor injerencia estatal en lo económico, no demuestran un rechazo al neoliberalismo, sino su corrección pragmática. Valdés decía que “en no pocas ocasiones hemos manifestado nuestra adhesión a la política social de mercado y a la apertura de la economía al exterior, aspectos ambos que tienen evidentes ventajas sociales y económicas”, empero, las “excesivas y abruptas variaciones de los principales productos agropecuarios” (El Campesino, septiembre de 1984, p. 12-13) eran intolerable para un sector que demanda estabilidad. Para la SNA el Plan Trienal cristalizaba importantes correcciones a los principios del “neoliberalismo puro” (Ffrench-Davis, 2004).

47

La pasividad a la que había sido relegada la SNA en el último lustro comenzaba a ser dejada en el pasado. La patronal agraria comprendió que si quería seguir cumpliendo el objetivo de defender los intereses de las clases propietarias agrarias, debía volver a la escena pública y al diseño de las políticas económicas agrarias. Y, si bien, las medidas correctivas iban bien encaminadas, esto no mermó las expectativas del gremio de los grandes agricultores para seguir expandiéndolas al conjunto de sus sectores más deprimidos económicamente. La pasividad no era ya el camino.

II. 1985-1987: CONSOLIDANDO LOS TRIUNFOS, DEBATIENDO CON LOS ADVERSARIOS

Bajo el panorama anteriormente descrito, la SNA afrontó el año 1985. Las acciones llevadas adelante por la Mesa encabezada por Manuel Valdés parecieron ser respaldadas cuando el 22 de abril de 1985 se renovó su dirección en la SNA. Para Valdés ello representó “un respaldo a la línea seguida hasta aquí, advirtiendo que ahora se inicia un período que constituye un verdadero reto para nosotros” (El Campesino, mayo de 1985, p. 4). La labor de la directiva fue seguir presionando para así lograr una política agraria satisfactoria a sus intereses como

grupo dominante en el agro. Por ello se reunieron el 8 de mayo de 1985 en la sede de la SNA con Pinochet, el Secretario General de la Presidencia, Francisco Javier Cuadra y el Ministro de Agricultura Jorge Prado. El fin era conocer la impresión del gobierno sobre la política agraria. La satisfacción era total cuando se informó que “se mantendría la política agropecuaria” (El Campesino, junio de 1985, p. 8). Pero, este prometedor panorama no hizo que la SNA desaprendiera sus lecciones. Sabían que mostrar signos de pasividad los podía llevar a una situación similar a la de 1975-1982, por lo que se volvía imperioso no abandonar su estrategia tendiente a la protección de sus intereses, pasando desde la pasividad al protagonismo. Por esta razón se siguió impulsando la estrategia de la unidad gremial. Así, entre los días 16 y 21 de junio de 1985 se realizó una gira por la zona sur que tenía por objetivo “generar una política estable”, a la vez que se afianzaba “la importancia de la unidad de los agricultores” en los problemas “de la empresa agrícola, como el alto nivel de endeudamiento y la protección de las bandas de precios” (El Campesino, julio de 1985, p.8-9). La movilización sectorial y su actitud confrontacional por la defensa de sus demandas, no movía en un ápice la defensa de la Sociedad ante las autoridades de gobierno. Esto quedó en evidencia cuando producto de la investigación del “caso degollados”, donde tres profesores militantes del Partido Comunista fueron asesinados por medio del degüelle por Carabineros, se produjo la salida del General Director de Carabineros César Mendoza, el 2 de agosto de 1985. La Sociedad no dudó, a pesar de las graves imputaciones, en enviar sus saludos al saliente General Mendoza y al entrante General Rodolfo Stange (El Campesino, octubre de 1985, p. 7).

48

El diagnóstico prometedor de la SNA parecía ser confirmado cuando Valdés señaló en 1986 que el agro crecería en un 8%. Desde *Estrategia* se indicaba que en “marcha de una serie de **mecanismos de protección a la actividad local**, como fueron las **bandas de precio, sobretasas arancelarias, derechos específicos a la importación** y valores mínimos de aduana”⁸, han repercutido en “un incremento del empleo y ahorro de divisas” (Estrategia, 6 al 12 de enero de 1986, p. 7). Pero este clima de júbilo era sólo parcial. En 1985 todavía no se atenuaban por completo las críticas de la SNA a la ortodoxia neoliberal. Se siguió criticando la apertura comercial indiscriminada. Y, a pesar de las críticas lanzadas desde los órganos representantes de la ortodoxia monetarista, el semanario *Estrategia* indicó que éste no era un debate en si la economía debía estar o no abierta, sino que éste se concentraba en “el grado de celeridad y la ausencia de regulaciones” (Estrategia, semana del 27 mayo al 2 de abril de 1985, p. 3). Por otra parte, aunque el establecimiento de medidas proteccionistas por parte del Estado a los cultivos tradicionales había sido fervientemente celebrado por la SNA, éstos no estuvieron exentos de polémicas. COPAGRO que a fines de 1984 se había comprometido a comprar a los agricultores de la cuarta a la décima región el trigo producido. Llegado el mes de mayo de 1985, José Lyon, presidente de COPAGRO anunció los precios del poder comprador: \$ 2.000 el quintal de maíz y \$ 2.050 el de trigo. La

8 Las negritas son nuestras.

SNA expresó, el 27 de marzo de 1985 su desacuerdo con el precio ofrecido por COPAGRO aduciendo que para el trigo el precio es inferior entre un 25 y 30% al costo de importación del producto, por lo que los productores de trigo dejarían de percibir US\$ 30.000.000. Por su parte, el precio propuesto para el arroz sería inferior 32% al coste de importación (El Campesino, abril de 1985, p. 7).

Manuel Valdés indicó estar de acuerdo con el establecimiento de poderes compradores, pero estos, a su juicio debían reflejar para el productor “un valor no inferior al que costaría al país importar dichos productos”, de lo contrario se perjudica al agricultor, “dado que los precios establecidos sirven como nivel de referencia a los molinos para comprar a los productores, lo que al final puede desincentivar las siembras” (El Mercurio, 28 de marzo de 1985, Cuerpo B, p. 1-2).⁹ Ante la declaración de la SNA sobre la reconsideración de los precios ofrecidos por COPAGRO para el maíz y el arroz, la Cooperativa señaló que para fijar el precio de compra, no se puede tener como única referencia el precio de importación de los productos. Se debe además, tomar como referencia el coste financiero, los gastos de guarda y bodegaje, las mermas del producto hasta que se venda, entre otros factores. Además de ello, COPAGRO, de mano de José Lyon recordó que entre enero y diciembre de 1984 el precio del maíz en el mercado internacional bajó en un 25%, a lo que éste se preguntaba: “¿estaría dispuesta la S.N.A a pagar a COPAGRO la pérdida cuantiosa que esto significaría?”. Además de ello, se señalaba que lo dicho por la SNA en relación al dinero que dejaría de percibir los agricultores de fijarse los precios indicados por COPAGRO, no correspondía a la realidad, puesto que los agricultores habían recibido \$ 3.495.000.000 más “que lo que hubieran recibido de no haberse abierto los poderes compradores de COPAGRO”. Finalmente se invitó a la SNA a que, puesto que los créditos Warrants¹⁰ están abiertos a cualquier entidad que quiera participar en el mercado, sean ellos los que inicien un poder comprador que adquiera los productos regulándose por los precios de importación, con lo cual COPAGRO “suspendería su poder comprador y pondría a disposición de la S.N.A toda su infraestructura y elementos para que ésta pueda llevar a la práctica dicha quimera” (Archivo del Ministerio de Agricultura, vol. 2560). Una editorial de *El Mercurio* captó nítidamente la controversia, que era en el fondo el interés de los agricultores por “percibir la cantidad más alta posible por sus cosechas”. Reconociendo que el precio que se le pagaba a los productores nacionales no era igual al costo de importación del trigo extranjero, también se apunta que sin la existencia de poderes compradores “los agricultores nacionales recibirían menos que hoy” (El Mercurio, 3 de abril de 1985, Cuerpo A, p. 2).

49

Lo que se desprende de esta polémica es que a pesar del establecimiento de poderes compradores -protección estatal-, la que como vimos era una demanda

9 Las negritas son nuestras.

10 Créditos para los poderes compradores fijados en U.F.

prioritaria de la SNA en el camino de la protección del agro, ésta no estuvo al margen de “pequeñas batallas” en su aplicación. La SNA en la senda de proteger a los agricultores, y maximizar las ganancias de éstos, no dudó en irrumpir con su estilo confrontacional, aún con aquellas instituciones que obraran en beneficio de los agricultores. Sin embargo, cabe indicar, que tal como se editorializaba El Mercurio la existencia de poderes compradores ya era en su esencia mejor que la desprotección para el empresariado agrupado en la Sociedad. Este caso nos permite observar la actitud confrontacional de la SNA, una vez más.

Estas actitudes de la SNA le abrió un nuevo flanco de batalla con los Chicagos. El ingeniero comercial de la Universidad Católica y Ph.D en la Universidad de Chicago, Ernesto Fontaine indicó que el alza de los precios de los productos agrícolas se debió en gran medida “a la generosa banda de precios que se ha establecido para la importación de trigo”. Las autoridades en su objetivo de aumentar la producción nacional del trigo, mejorar la situación de la agricultura, disminuir la competencia externa y ahorrar divisas, estableció este mecanismo con un piso “demasiado elevado”, lo que repercute en que “el precio del trigo en Chile sea significativamente mayor que el costo de importarlo y, por ende conduce a que los consumidores tengamos que pagar un precio exagerado por el pan”. Para el economista ello constituía un “enorme injusticia social” (El Mercurio, 2 de junio de 1985, Cuerpo B, p.1).

50

La SNA no tardó en responder a este tipo de críticas. Se subrayó que la agricultura requería para su progreso y desarrollo un cierto marco de estabilidad que les permitiera a los productores tomar decisiones razonadas con antelación a la cosecha y comercialización, por lo que la crítica al sistema de bandas no se entendía. Ante la argumentación de que la banda constituía un subsidio a los productores¹¹ que traspasaba los costos a los consumidores, la Sociedad dijo que ello no es cierto, puesto que el precio se fijó en concordancia con el piso y techo del precio internacional del cereal, por lo cual el mecanismo sería de carácter neutral, es decir, que no perjudicaba a los consumidores ni a los productores. El mecanismo tenía por objetivo únicamente, aducía Manuel Valdés, “neutralizar las fuertes y abruptas fluctuaciones que experimentan los precios en el mercado internacional, evitando así los perjuicios en la agricultura local (El Campesino, julio de 1985, p. 4). Para la Sociedad, las ideas de Fontaine fueron una campaña que buscó desacreditar la política agraria aplicada con éxito desde 1983. Sin embargo, la Sociedad no escatimó en presentar su impronta confrontacional con las ideas que perjudicaban, a sus ojos la actividad agropecuaria. Decían que la Sociedad ha “proclamado una vez más su inquebrantable decisión de **luchar sin claudicaciones por que se den a la actividad agropecuaria las condiciones adecuadas** que le permitan seguir cumpliendo la histórica y trascendental mi-

11 En la época hubo un estudio de Francisco Labbé y Matías Domeyko, que además de señalar que la banda no era neutra, generaba una mayor tasa de desempleo al incentivar rubros como el triguero que necesitan poca mano de obra.

sión que el país le reclama con dramática urgencia: producir alimentos, generar empleos y ahorrar divisas” (El Campesino, julio de 1985, p. 2-3)¹².

La SNA logró posicionar tras de sí al ex ministro de Estado Sergio Onofre Jarpa quien dijo que existió una campaña destinada “a desmontar las políticas agrícolas diseñadas por el Gobierno en los últimos años”, las cuales han permitido “que se esté recobrando nuevamente” el sector agrícola. Para Jarpa la crítica pretende “regresar a políticas antiguas y fracasadas, las que fueron reemplazadas por enfoques más apropiados y realistas” (El Mercurio, 2 de junio de 1985, Cuerpo B, p. 1), reflejados en el cambio del Ministerio de Economía con Manuel Martín a la cabeza y Prado en Agricultura. Por su parte el Ministro Jorge Prado, indicó que era de vital importancia que la política triguera y la política general agrícola se mantuvieran, ya que, si ésta se abandonara “nos deberíamos ir olvidando de la agricultura en Chile” (El Mercurio, 4 de junio de 1985, Cuerpo C, p. 3). Las declaraciones, tanto del ex Ministro del Interior como del titular de Agricultura representaban un fuerte espaldarazo a la labor realizada por la SNA en la protección de los grandes agricultores nacionales.

Pero Fontaine no frenó sus críticas a la “excesiva protección que se había proporcionado a los productores trigueros”. Si bien concordó con Jarpa en que debía existir un debate amplio para fijar la política triguera, decía que ella transfería costos a “los estratos más pobres de la población”, debido al establecimiento de un piso demasiado elevado fijado por la banda del trigo. Señaló que no se oponía a la banda en sí, sino a que se “establezca una protección excesiva”, derivada de un arancel “específico a la importación de grano, lo cual conduce a que éste sea más caro y, por lo tanto, también lo sea el pan” (El Mercurio, 5 de junio de 1985, Cuerpo B, p. 2). Para la SNA esta sobretasa a la importación era indispensable para frenar los subsidios otorgados en los países de origen a este tipo de productos. Estas acciones de la Sociedad fueron respaldadas por el Consorcio Agrícola del Sur (CAS), quienes indicaron que el cuestionamiento actual a la banda del trigo seguirá después con “la de otros cultivos, como el de las oleaginosas, los derechos específicos de la leche y la política remolachera” (El Mercurio, 5 de junio de 1985, Cuerpo C, p. 7). Este respaldo de CAS no puede ser interpretado como una mera capacidad de la SNA de posicionar a sus espaldas al resto de las organizaciones patronales del agro, puesto que ésta también tenía comprometida sus intereses en cultivos como el trigo. Empero, no cabe duda de que la acción conjunta de los gremios, con la SNA a la cabeza dotaba de un mayor peso específico las peticiones de los agricultores aunados en los gremios.

De esta forma, vemos que para la SNA era esencial la mantención y la expansión de medidas que protegían a los empresarios locales de los efectos vertiginosos de la aplicación dogmática de las ideas neoliberales. La aplicación de la política económica debía de tomar en cuenta los intereses de los grupos dominantes en el

12 Las negritas son nuestras.

agro. La SNA, que si bien evitó seguir la polémica, no se sustrajo de iniciar acciones movilizadoras para defender la política agraria. Manuel Valdés anunció para el 14 de junio de 1985 la convocatoria a los representantes de entidades gremiales de la agricultura con el fin “formular programas de acción y dar respuestas a críticas formuladas sobre algunos puntos de la política agraria del Gobierno” (El Mercurio, Revista del Campo, 10 de junio de 1985, p. 10). Agregó, en un tono confrontacional que “en estos momentos no hay un solo dirigente que no esté con la cara pintada y con el hacha de guerra, porque no vamos a permitir, de ninguna manera que se ponga en jaque esta política” (Estrategia, semana del 10 al 16 de junio de 1985, p. 10-14). De esta manera se demostró que no bastaba con el resquebrajamiento de la pasividad, se debía recuperar el protagonismo arrebatado.

Para cerrar esta polémica, que no fue la primera ni la última, Jorge Prado, anunció que la política agraria sería mantenida “más allá de las presiones de cualquier lado a que se vea sometido, porque la considera eficiente y equilibrada”. Para el ministro ésta se enmarcaba en el esquema de la economía social de mercado en donde la autoridad “debe buscar la corrección a ciertas deficiencias que se producen en el mercado para algunos productos” (El Mercurio, 11 de junio de 1985, Cuerpo A, p. 1-10). Éste fue un importante apoyo para la SNA que a través de su Secretario General, García Astaburuaga señaló que no “continuará esta estéril polémica, pues está consciente que con ella da desmedida **estatura a ciertos personeros que están empeñados, con increíble obcecación y dogmatismo en la tarea de reimplantar rigurosamente un esquema de desarrollo que sumió a la agricultura en la más profunda crisis económica de su historia**” (El Mercurio, 12 de junio de 1985, Cuerpo b, p. 1-2)¹³. A pesar de ello, desde las editoriales de *El Mercurio* se siguió argumentando que existen “opciones más convenientes que las bandas de precios” (El Mercurio, 14 de junio de 1985, Cuerpo A, p. 3), para darle estabilidad al sector. Empero, esta vez la SNA no atendería la disputa. Se contentaba con las ratificaciones de las medidas económicas emanadas desde poder central. De esta forma se felicitaba al saliente Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, Modesto Collados -reemplazado por Juan Carlos Délano- por su esfuerzo en la reactivación del sector agrícola, la que obedeció, en buena parte, “a la acentuada, coordinada y pragmática acción desarrollada por el equipo económico” (El Campesino, septiembre de 1985, p. 4). que dirigió Collados. Este cambio es sentido “por vastos sectores de la comunidad, especialmente por aquellos ligados a la actividad productiva” (Estrategia, semana del 5 al 11 de 1985, p. 3).

Durante el año 1986 la polémica con COPAGRO siguió cuando el poder comprador fijó un precio menor al esperado por la SNA -\$ 3.400 por quintal-, acusando que existía una sobreoferta de trigo. Para la SNA la buena cosecha de trigo, representaba la confianza de los agricultores que habían vuelto a trabajar en sus faenas, logrando el autoabastecimiento del cereal, que a su vez ahorraba divisas

13 Las negritas son nuestras.

al país. No obstante, la decisión de fijar un precio menor al esperado significaba “violar la confianza” de los agricultores. “Bajo la excusa de una buena producción, que no es sobreproducción, alegaba el agricultor Renato Gazmuri -Consejero de la SNA-, se había producido una baja en el precio del trigo. Para un Chicago Boys como Álvaro Bardón esto significó que la política de protección al trigo “está agotada, como toda política de sustitución de importaciones”. Para el economista los nuevos estudios a realizar debían indicar si es “necesario subsidiar o no la producción de trigo” (El Mercurio, 15 de noviembre de 1986, Cuerpo B, p. 1). Estas críticas reflejaban la animadversión de los Chicagos con las medidas proteccionistas, tanto de las bandas de precios como de los poderes compradores.

Esta situación causó evidente molestia en la SNA. El 17 de noviembre le anunció a las autoridades dictatoriales que era preciso mejorar el precio del trigo para no afectar negativamente las decisiones de siembra del próximo año y agravar la situación de endeudamiento de los productores (El Campesino, noviembre de 1986, p. 4). Esto llevó a una disputa con el ministro Prado -futuro presidente de la SNA- quien recomendó la baja de las zonas plantadas por el cereal, lo cual para Renato Gazmuri era una reedición del “cómanse las vacas” del ministro Costabal. (El Mercurio, 15 de noviembre de 1986, Cuerpo B, p. 1-20).

La *Revista del Campo* de *El Mercurio* había indicado que el precio del trigo había constituido “la vedette del escenario de la agricultura nacional” (Revista del Campo El Mercurio, 24 de noviembre de 1986, p. 3), lo cual seguía siendo válido para el año 1987. Manuel Valdés, señaló que la política que había sido aplicada desde Modesto Collados en adelante había permitido un repunte del sector agrícola. Como siempre, se dijo que “una economía cerrada deja a la agricultura en una posición desmejorada”, empero la apertura inescrupulosa causa problemas que tienen una envergadura similar. A pesar de la crítica de algunos, como la embajada de Estados Unidos a las bandas, Valdés señaló que “no puedo entender que critiquen una política que ha significado una mejora en la balanza comercial” (El Mercurio, 13 de abril de 1987, Cuerpo B, p. 1-12).

A pesar de esto, los ataques contra la política triguera y su nueva situación de autoabastecimiento no tardaría en provocar las críticas que llevaban el sello de la ortodoxia neoliberal. Una editorial de *El Mercurio* decía que el excedente de los productos tendía a ser exportado, sin embargo, con el trigo no era así. Esto debido a que el cereal que se producía no era consecuencia de las ventajas comparativas, algo fundamental para los neoliberales más ortodoxos a la hora de elegir la producción de una mercancía. Es más, para el diario la notable producción de trigo se había producido con “un incremento en los precios de venta del pan y de harina, con el consiguiente deterioro del poder de compra de los consumidores, los que son, de hecho mayoría”. Junto a esto “la intervención del Gobierno en este mercado ha derivado los recursos de suelo disponible hacia el trigo, en detrimento de otras producciones, que en el largo plazo son más atractivas para el país”. En resumen, el aumento de la producción triguera fue posible por una mayor cantidad de precios pagados por los consumidores, y por menores producciones de otros

rubros, que tienen mayor capacidad de exportación. Ante eso, la sugerencia que se hacía al Gobierno era de “mediar acerca de la conveniencia de mantener en el futuro” (El Mercurio, 16 de octubre de 1987, Cuerpo A, p. 3) una política de protección al trigo. La crítica no pasó desapercibida, Benjamín Matte Guzmán, señalaba con respecto a la editorial anteriormente citada que “hay algunos que siguen pensando en **nuestra realidad agraria como un escenario teórico de dogmas económicos o políticos**. El país ha pagado con sudor y lágrimas en el pasado esta mentalidad”.¹⁴ Lo que debía hacer el “Supremo Gobierno” era seguir esta “exitosa política agrícola” (El Mercurio, 24 de octubre de 1987, Cuerpo A, p. 2).

Si la crítica de la ortodoxia estaba presente, no cabía duda esperar la intervención de Ernesto Fontaine. A principios de noviembre del año 87, uno de los máximos exponentes de los “Chicago” señalaba que no era sano volver a una política en donde el Estado actuó como Robin Hood. Se dice que el valor pagado por los consumidores de trigo es “un precio mentiroso” derivado de la aplicación de la política de la banda de precio (El Mercurio, 5 de noviembre de 1987, Cuerpo A, p. 3). La respuesta de José Moreno no se hizo esperar, con un llamado a los socios de la institución para alertarlos de la concertada campaña contra las bandas de precios. Señaló Moreno Aguirre que el “circunstancial excedente registrado en la última cosecha de trigo ha dado pie para que se emprenda una intensa campaña contra de las bandas de precios, olvidando sus promotores los múltiples beneficios que para el país representa el crecimiento de nuestra agricultura” (El Mercurio, 7 de noviembre de 1987, Cuerpo A, p. 1-16). Esto no aplacó las críticas de Fontaine, quien arremetió nuevamente contra las bandas. El economista de la Universidad Católica dijo que el “el precio piso fijado para el trigo ha sido significativamente mayor que el costo social de importarlo, de modo que el precio que pagamos los chilenos ha sido por lo menos el 30 por ciento mayor que el que hubiéramos pagado si éste correspondiera al verdadero costo de su importación”. Esto ha significado una transferencia de recursos desde los sectores más pobres a los más ricos -esto a pesar del estudio generado por la SNA en cuanto a que la banda era neutra en este sentido-. Esto se confirmaba, ya que se dijo que el excedente de trigo sería vendido a criaderos de chanchos o de lo contrario exportado a su precio FOB, en menos de 10 dólares el quintal, lo que equivale a “cerca de la mitad del precio que está pagando hoy el consumidor chileno”. Fontaine se preguntó “¿No es absurdo que los extranjeros se les venda el trigo a un precio menor que el pagado por nuestros ciudadanos e hijos? (...)¿Tienen los chanchos algún mérito que no posee la población?”. Finalizaba su columna Fontaine aduciendo que “cada cambio en las reglas del juego ha tenido como efecto un mayor precio pagado por Moya a los no tan pobres productores de trigo, generando riquezas que a mi juicio son “ilegítimas”” (El Mercurio, 16 de octubre de 1987, Cuerpo A, p. 3).

Álvaro Bardón arremetió con la misma dureza que su colega Fontaine contra las bandas. Comenzaba señalando que “mientras China se liberaliza y abre a la

14 Las negritas son nuestras.

modernidad y Cuba y Nicaragua se empobrecen por insistir en un rol más activo del Estado”, en Chile se avanza **“con dificultad hacia la libertad, por la incompreensión de algunos grupos influyentes retardatarios que, incluso, penetran en las decisiones oficiales y de los partidos políticos”**¹⁵. La actitud de estos grupos, como la SNA a la que se alude implícitamente, era de tipo corporativista para el economista de Chicago, lo cual obstaculizaba la libertad de las personas. “Lamentablemente muchos chilenos todavía no se dan cuenta de que las prácticas estatistas violan los derechos personales y perjudican las posibilidades de desarrollo” (El Mercurio, 17 de noviembre de 1987, Cuerpo A, p. 2). Las noticias serán peores para los economistas más ligados a la ortodoxia neoliberal, y más favorables a la SNA, debido a que la Junta de Gobierno acordó modificar la ley que sustenta la aplicación de bandas para la internación de algunos productos, dentro del que destaca el azúcar. Para los editorialistas de *El Mercurio* esta medida específica para el azúcar, “tiene consecuencias para toda la política que se ha venido siguiendo en la materia, por cuanto abre el precedente de que cuando las cosas no se dan a favor de los productores las reglas se modifican”, lo cual tiende a desvirtuar la idea de “que el efecto de las bandas de precios es neutro en el largo plazo” (El Mercurio, 24 de noviembre de 1987, Cuerpo A, p. 3). De ahí la fuerza que puso la SNA en la consecución concreta de sus ideas: abrir precedentes que luego pudiesen ser expandidos a otros rubros del sector agrícola.

Álvaro Bardón reaccionó nuevamente, escribiendo una columna de opinión denominada “La banda borracha”. El motivo de este título hace alusión a una frase de un amigo del economista que refiriéndose a una canción le explicó que lo que pasaba era que “la banda está borracha”. Para Bardón existía una curiosidad en la borrachera, y era que el borracho siempre se “cae para el mismo lado, es decir, contra los pobres que consumen pan, harina y fideos”. Luego, haciendo una clara referencia a la columna de su cercano Ernesto Fontaine señaló que la banda tenía aspecto de “Hood-Robin, el antihéroe que asaltaba pobres para entregarle plata a los ricos”. De ahí el primer problema de las bandas, siempre se corregían con el fin de perjudicar a los consumidores y favorecer a los productores. Así la banda era vista como “un pretexto para subsidiar a algunos con el dinero de los pobres que consumen pan, harina, fideos, aceite, azúcar y otros bienes de consumo popular” (El Mercurio, 24 de noviembre de 1987, Cuerpo A, p. 2). La idea no era equivocada, la lealtad de la SNA estaba con sus afiliados, por lo cual no dudó en continuar con una actuación corporativista en la defensa de sus intereses, a pesar de las diversas críticas que esto generaba

Por este motivo la SNA recogió la bandera de batalla de las bandas de precios. El 23 de octubre de 1987 anunciaron que existía una campaña “concertada contra la política de bandas de precios” (El Mercurio, 24 de noviembre de 1987, Cuerpo A, p. 4-5). En su declaración pública expresaron que se “luchará sin claudica-

15 Esta alusión a los partidos políticos es por Renovación Nacional, quien anunció que la bandas de precios debería estar a lo menos hasta el año dos mil. Las negritas son nuestras.

ciones por la estabilidad de las reglas del juego, condición indispensable para que nuestro sector pueda seguir contribuyendo en forma creciente al progreso económico y social del país” (El Mercurio, 24 de noviembre de 1987, Cuerpo B, p. 20). Por supuesto, la mantención de las reglas del juego era algo diametralmente opuesto a lo que se refería Bardón con las reglas estables. Era la mantención de las políticas agrícolas que tendían a la protección de los empresarios agrarios. Para la Sociedad estas críticas, como hemos visto no eran nuevas, por lo que señalaron que “sus autores son los mismos que desde el instante en que se adoptó dicha política iniciaron una sostenida campaña destinada a cuestionar su aplicación” (El Campesino, noviembre de 1987, p. 4-5).

Jorge David Lebón de la SNA decía que de “materializarse los anhelos del señor Fontaine se destruiría gran parte de nuestra infraestructura productora de trigo”. La tarea de la organización patronal agrícola era luchar “sin claudicaciones por la estabilidad de las reglas del juego” (El Campesino, diciembre de 1987, p. 14-16). Esta actitud vigilante fue reafirmada en el discurso inaugural de Moreno Aguirre de la FISA de 1987 cuando apuntó a que se rechaza de manera categórica a aquellos que con “inaceptable ligereza” pretenden “desconocer las bondades de las políticas implementadas, a través del análisis de uno solo de sus efectos, olvidando que éstas por definición conllevan necesariamente costos y beneficios, y que únicamente el examen conjunto de todos ellos permite extraer una conclusión técnicamente valedera al respecto” (El Campesino, 7 de noviembre de 1987, p. 27). El 6 de noviembre esta actitud vigilante había sido respaldado por la Asamblea de Socios de la SNA, quienes hicieron duras críticas a los detractores de la política de bandas.

56

Las demandas de los agricultores tuvieron su resonancia a nivel gubernamental. El 3 de diciembre de 1987 el Ministro de Hacienda, Hernán Büchi anunció que las reglas enfocadas al agro se mantendrían inalterables (El Campesino, diciembre de 1987, p. 4). De esta forma, se puede observar que el proceso de neoliberalización de la Sociedad se ve interrumpido constantemente por su disputa con los representantes de la ortodoxia neoliberal, y por la defensa corporativa de sus intereses sectoriales, no obstante, las medidas correctivas y los beneficios por ellas producidas lograban que se ocasionara una adaptación al modelo, que todavía no era proyectual. Lo que haría cambiar éste panorama fue el gran pánico desatado por la transición.

III. 1988-1990: LA DEFENSA DEL LEGADO PINOCHETISTA

La SNA afrontó los últimos años de la dictadura cívico-militar de forma vigorosa, más confiada de sí misma ya que había logrado consolidar los cambios introducidos a la política agraria en beneficio de los grandes empresarios agrícolas locales. En el bienio de 1983-1984 rompió la pasividad, mientras que en el trienio de 1985-1987 había retomado el protagonismo, a través de sucesivos debates con

los representantes ortodoxos del neoliberalismo y su influencia en el diseño de la política agraria. Esto le permitió a la Sociedad embarcarse de lleno en la defensa del legado pinochetista ante los eventuales cambios que se producirían con la transición democrática, la cual era una realidad concreta luego de la derrota del dictador en el plebiscito de 1988. Ante este contexto, la organización de los patronos agrícolas comenzó una fuerte campaña por la defensa de la libertad de emprendimiento, empresa y protección del derecho de propiedad privada de los medios de producción, lo que la llevó a un acercamiento más estrecho con la Confederación de la Producción y el Comercio, en comparación con la que había generado durante los períodos analizados en las secciones anteriores.

Así se producía adhesión de la Sociedad a las ideas neoliberales, luego de la corrección del modelo en sus diferentes ámbitos. Durante 1988 a 1990 la SNA se vio más cercana al resto de los grandes gremios empresariales neoliberalizados encabezados por la figura de Manuel Feliú en la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) (Álvarez, 2016). De este modo, Sergio Romero representó a la SNA, la que entregó su respaldó la declaratoria del “gremio de gremios” el 29 de enero de 1988, en cuanto a la legitimación del proceso transicional en que podían participar las fuerzas políticas que aceptaron la Constitución de 1980: “El proceso de transición a la democracia debe llevarse a cabo con la participación de todas las corrientes políticas que respeten la normativa constitucional y legal vigente”. Esto no quería decir, que los empresarios desistieran de un apoyo explícito al dictador en contra de las fuerzas democráticas. Para los empresarios, incluidos los agrícolas, la democracia política se encontraba supeditada a la libre iniciativa y la libre empresa, lo cual garantizaba un no retorno a la política previa a 1973. “El régimen democrático de gobierno, representa profundamente el sentir de nuestra comunidad y es donde mejor se puede perfeccionar y desarrollar un sistema que respete y aliente la iniciativa privada, base de toda sociedad libre”, pero ésta transición se apoyará “en el entendido que no se reeditarán los vicios del sistema que llevó al país a la crisis política, social y económica de 1973” (El Mercurio, 30 de enero de 1988, Cuerpo A, p. 1). Vale decir, si no se aseguraba el esquema de la libre empresa no podía existir democracia política, por lo cual el plebiscito se volvía fundamental, en cuanto a que se decidiría si es que se quiere “volver al oscuro pasado o proyectarse libremente hacia el futuro”. En ese sentido los empresarios señalaban “tenemos algo que decir y debemos hacerlo claramente a toda la comunidad que la forma de salir hacia adelante se encuentra únicamente ligada al sistema de libre empresa”. Por estos motivos los empresarios declararon apoyar a “quienes sustenten y compartan con nosotros principios comunes de respeto a la libertad de emprender, la propiedad privada de los medios de producción y la acción subsidiaria del Estado” (El Campesino, mayo de 1988, p. 6). De esta forma se parecía dejar atrás a los contendores del monetarismo radical, para pasar a la defensa del modelo -luego de sus importantes correcciones- y dar batalla a aquellos, que se pensaba, podían modificarlo. Por eso se hacía un llamado a los empresarios agrícolas para “velar porque la política económica que se está aplicando en Chile se perpetúe en el tiempo”. Se manifiesta que de retomarse las “añejas y fracasadas posiciones estatistas de

antaño, el sector agrícola volverá a vivir los difíciles momentos por los que atravesó en el pasado” (El Campesino, julio de 1988, p. 2-3). La tarea primordial de la SNA era ahora la proyección de la obra pinochetista, que consagraba la propiedad privada de los medios de producción, la libre iniciativa de los empresarios, la apertura al comercio exterior -con todos los constreñimientos requeridos para la protección de la agricultura local- y el rol subsidiario del Estado. La adaptación de la SNA al neoliberalismo -y a la defensa de la obra pinochetista- se selló durante la FISA de 1988. En dicha ocasión José Moreno expresó: “Hemos reiterado nuestra identidad con la estrategia de desarrollo económico implementada en estos años, como también con las diferentes políticas sectoriales aplicadas” (El Campesino, noviembre de 1988, p. 38). La identificación con el modelo económico parecía estar completa, con lo que su defensa se volvió una prioridad ante el nuevo escenario que abrió el proceso transicional. El 13 de abril de 1989 se ratificaría la necesidad de defender el legado dictatorial, cuando fue elegido como Presidente de la Sociedad el saliente ministro de agricultura, Jorge Prado Aránguiz, quien indicó que el llamado era a **“trabajar juntos para defender lo logrado**, que es en lo que creemos y por lo cual siempre hemos luchado” (El Campesino, abril de 1989, p. 2-3)¹⁶.

58

Luego de los importantes correctivos aplicados al modelo neoliberal, los empresarios retomaron la confianza en el equipo económico de la dictadura. Esto coincidió con la marginación de los economistas de sello más dogmático. Incluso, aquellos que se identificaban con la escuela económica de Chicago como el Ministro Büchi, tuvieron una actitud más pragmática que sus predecesores. A pesar que no todo el empresariado estaba de acuerdo con el conjunto del sistema económico, en especial algunos gremios agrícolas con los cuales la SNA estrechaba sus relaciones, sí se valoraba el hecho de que la dictadura hubiese equilibrado la lucha de clases a favor de las clases propietarias, a través de la represión al movimiento sindical y popular. Esto se expresó a nivel agrícola en una escasa posibilidad de la fuerza de trabajo para arrancarle concesiones al capital, en un proceso que se radicalizó con la flexibilización de la mano de obra, el predominio de las y los trabajadoras/es temporeras/os y con una legislación hostil a la fuerza del trabajo, como el Plan Laboral de 1979 (Tinsman, 2016, p.105). Todos estos factores determinaron que lo fundamental fuese la defensa de la obra cívico-castrense expresada en el modelo neoliberal. No obstante, la SNA no cedió la iniciativa, seguía en su camino de defender sus intereses sectoriales.

No obstante, la adaptación sui generis de la SNA al modelo económico dictatorial, no le hizo perder a la institución su impronta corporativista que la llevaba a una cerrada defensa de los intereses del grupo dominante en el agro, los empresarios agrícolas. La SNA buscó, aún en este período, expandir la defensa de los productores locales a través de las bandas de precios, o de la regulación en el funcionamiento de los poderes compradores, como estrategia de la defensa de

16 Las negritas son nuestras.

sus intereses. Así lo demostró con el desarrollo de giras que tenían el propósito de aunar esfuerzos para el mantenimiento de las políticas agrarias, las peticiones de sobretasas arancelarias para el maíz y el trigo, o la defensa soterrada de la industria vinífera.

CONCLUSIONES

El presente artículo buscó establecer que el proceso de neoliberalización al interior de la SNA no fue un camino rectilíneo, sino que éste estuvo plagado de obstáculos que dificultaban la adaptación de la Sociedad al modelo económico neoliberal. El tránsito de la pasividad al protagonismo y luego a la adaptación, fue un camino sumamente dificultoso. Por un lado, estaban aquellos aspectos más ortodoxos del neoliberalismo que eran incompatibles con la base social de la Sociedad Nacional de Agricultura, como lo eran la desprotección de la agricultura local y la apertura indiscriminada a los productos del mercado mundial. Por otro, se encontraban los representantes de éstas ideas que a través de los circuitos culturales del capitalismo (Undurraga, 2014) buscaban hacer hegemónicas las ideas de un mercado libre de cualquier tipo de regulaciones. La SNA buscó combatir ambos aspectos mediante la irrupción en el espacio público y en la elaboración de la política económica destinada a la agricultura de la que había sido apartada. La confección de medidas económicas más acordes a los intereses de los agricultores agrupados en la SNA se caracterizó por la petición de medidas proteccionistas, entre las que destacaron la aplicación de las bandas de precios como también la creación y fomento de poderes compradores.

59

La implementación de estas medidas proteccionistas atentaba contra las ideas dogmáticas del pensamiento monetarista, por lo que la SNA no tardó en encontrar oposición a sus demandas en figuras tales como Álvaro Bardón y, especialmente en Ernesto Fontaine. No obstante aquello, no se claudicó en su tarea de defender a los agricultores y empresarios agrarios, por lo que la actuación sociopolítica de la SNA entre los años 1983-1987 estuvo destinada a corregir a su favor los aspectos del modelo económico que eran visto como incompatibles con sus intereses. Asimismo, durante ese período se logró romper la pasividad y adquirir un protagonismo que había sido arrebatado cuando se comenzaron a aplicar las políticas de shock. Una vez logrado aquello, y con el temor causado por la inminente transición política, la SNA se acopló al modelo y se convirtió en un defensor férreo de éste, por lo cual frente a la coyuntura abierta con la derrota del dictador en el plebiscito de octubre de 1988. Sin embargo, su defensa del legado pinochetista no la llevó a abandonar la defensa corporativa de sus intereses por lo que se siguió recurriendo a la acción gremial del agro y la defensa soterrada de las medidas proteccionistas adquiridas.

BIBLIOGRAFÍA

- Almonacid, F. (2016). *Neoliberalismo y crisis económica: políticas estatales, mercado y agricultura en Chile, 1973-1985*. En *Historia Crítica* (n°62), 119-139.
- Armijo, G. y Caviedes, H. (1997). *Vicisitudes y cambios en el mundo rural chileno. La última modernización agraria ¿la solución de fin de siglo?*. En *Anales de la Universidad de Chile* (n° 5), 13-29.
- Cerón, I. (1987). *Oferta exportable de productos agrícolas: evolución y perspectivas*. En *Centro de Estudios Públicos* (n° 28), 123-168.
- Ffrench-Davis, R. (2003). *Chile, entre el neoliberalismo y el crecimiento con equidad*. En *Revista Nueva Sociedad* (n° 183), 70-90.
- Gómez, S. (1992). *El rol del sector agrario en la transición. Análisis del caso chileno. Documento de Trabajo n° 27*. Santiago: FLACSO.
- Gómez, S. (2001). *Democratización y globalización: nuevos dilemas para la agricultura chilena y sus organizaciones rurales*. En Giarraca, N. (comp.). *¿Una nueva ruralidad en América Latina?* (pp.243-268). Buenos Aires: CLACSO.
- Silva, E. (1993). *La política del régimen chileno durante la transición: del neoliberalismo radical al neo-liberalismo pragmático*. En Jaksic, I. y Drake, P. (comp.). *El difícil camino a la democracia en Chile 1982-1990*. Santiago: FLACSO.
- Valdivia, V. (2001). *¡Estamos en guerra, Señores! El Régimen Militar de Pinochet y el Pueblo, 1973-1983*. En *Historia* (n° 43), 163-201.
- Vergara, P. (1984). *Auge y caída del neoliberalismo. Un estudio sobre la evolución ideológica del régimen militar*, Santiago: FLACSO.

Diarios y Revistas

- *24 horas el Diario de Temuco*, 1983-1990.
- *24 Horas el Diario de Puerto Montt*, 1983-1990.
- *Archivo del Ministerio de Agricultura*, 1983-1990.
- *La Discusión*, 1983-1990.

- *El Campesino*, 1983-1990.
- *El Mercurio*, 1983-1990.
- *Estrategia*, 1983-1990.
- *Revista de El Campo de El Mercurio*, 1983-1990.